

Aliaga.**Unas 300 personas apoyan la planta de recuperación de CO2**

3.300 firmas y once entidades sociales defienden el proyecto paralizado por la DGA. La crisis industrial en la comarca ha provocado la pérdida de de 250 empleos.



Unas 300 personas se concentraron ayer ante el Ayuntamiento de Aliaga para reivindicar la instalación en el municipio de una planta de recuperación de dióxido de carbono (CO2), cuyo proyecto ha sido paralizado por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.

Al término de la movilización se leyó una declaración en favor del "impulso industrial sostenible", que ha sido respaldada por unas 3.300 firmas y once entidades sociales, según informó la plataforma Salvemos Aliaga.

La encargada de leer la declaración fue la presidenta de la Asociación de amas de casa, Ana Gargallo, quien estuvo acompañada en el balcón del ayuntamiento por el presidente de la Comarca Cuencas Mineras, Francisco Altaba, el alcalde de la localidad, José López, y el presidente de la Plataforma Salvemos Aliaga, Simón García. Entre el público se encontraban, además, diputados provinciales y consejeros de la Comarca.

Francisco Altaba destacó que "la comarca en pleno apoya esta reivindicación y tomará decisiones a favor", ya que, en su opinión, el proyecto de la planta de cogeneración "es perfectamente compatible" con el medio ambiente.

El alcalde de Aliaga y el presidente de la plataforma subrayaron por su parte que Aliaga mantendrá las movilizaciones hasta que la Administración autonómica autorice las nuevas instalaciones.

Asociaciones de vecinos, ayuntamientos y entidades empresariales, "preocupados por el futuro de la población de la zona" y unidos en la plataforma Salvemos Aliaga, sumaron fuerzas para reivindicar que no se dejen escapar oportunidades de desarrollo industrial que consideran sostenible en la situación económica en que se encuentra la comarca.

La crisis industrial y de empleo en las Cuencas Mineras ha provocado la pérdida de empleo de 250 puestos de trabajo. Según han denunciado los sindicatos y diversos grupos políticos se trata de la situación más grave de la zona desde el cierre de las minas de carbón, en 1991, y en esta ocasión no hay recursos económicos para generar tejido industrial, única opción para que no se despoble esta comarca de 9.000 habitantes.